

**Asamblea General**

Distr. general
15 de julio de 2014
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 69º período de sesiones
(22 de abril a 1 de mayo de 2014)**

Nº 5/2014 (Iraq)

Comunicación dirigida al Gobierno el 16 de diciembre de 2013

Relativa a: Shawqi Ahmad Omar

El Gobierno respondió a la comunicación el 19 de marzo de 2014.

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. El mandato fue prorrogado por otros tres años mediante la resolución 24/7, de 26 de septiembre de 2013. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

GE.14-08404 (S) 230714 240714



* 1 4 0 8 4 0 4 *

Se ruega reciclar



c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, o discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El caso que se menciona a continuación fue comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

4. Shawqi Ahmad Omar, nacido en 1962 en Kuwait, es ciudadano de Jordania y ciudadano naturalizado de los Estados Unidos de América.

5. El Sr. Omar llegó al Iraq procedente de la República Árabe Siria con su mujer el 3 de junio de 2004 para trabajar en la industria de la construcción. A finales de octubre de 2004, el Sr. Omar y su mujer fueron detenidos en la casa del tío de este, en el distrito de Zaiyouna, en Bagdad, por la Fuerza Multinacional dirigida por los Estados Unidos. El Sr. Omar permaneció recluido en el centro de detención del campamento Na'ma, cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, acusado de haber participado en actividades relacionadas con el terrorismo. La fuente sostiene que la Fuerza Multinacional torturó al Sr. Omar y a su mujer con descargas eléctricas durante los interrogatorios.

6. La mujer del Sr. Omar fue puesta en libertad 16 días después y posteriormente salió del país. El Sr. Omar permaneció recluido sin que se hubieran presentado cargos contra él y sin que se lo sometiera a juicio hasta 2010, cuando su caso fue trasladado a un tribunal penal en el Iraq. El 24 de junio de 2010, el Sr. Omar fue condenado a 15 años de prisión por el delito de entrar ilegalmente en el Iraq. La fuente indica que nunca se informó al Sr. Omar del cargo que se le imputaba. El Sr. Omar no contó con asistencia letrada durante el juicio, ya que en principio se había previsto que tuviera lugar en julio de 2010 y no se comunicó a su abogado que la fecha del juicio se había modificado. Además, el Sr. Omar cree que se ha confundido su identidad, ya que se lo condenó con el nombre de un nacional palestino llamado Shawqi Ahmad Sharif. El Sr. Omar recurrió la sentencia y en febrero de 2011 el Tribunal de Casación redujo la pena a siete años de prisión.

7. El 15 de julio de 2011, el Sr. Omar fue entregado a las autoridades iraquíes. La fuente indica que, tras su reclusión inicial en el campamento Na'ma en 2004, el Sr. Omar permaneció recluido en varios centros de detención, entre ellos el campamento Bucca, el campamento Cropper y la prisión de Abu Ghraib. Al parecer, el Sr. Omar estaba recluido en el campamento Cropper en el momento de su traslado. Según la fuente, el Sr. Omar hizo una huelga de hambre desde febrero hasta agosto de 2013, como forma de protesta por su reclusión prolongada y por haber sido condenado en virtud de un error de identidad. La fuente cree que recientemente el Sr. Omar ha sido trasladado a la prisión de Abu Ghraib y que sigue recluido allí.

8. La fuente alega que la privación de libertad del Sr. Omar es arbitraria, puesto que fue condenado en virtud de un error de identidad. Para apoyar su afirmación, la fuente informa de que otro de los imputados en la causa del Sr. Omar firmó una declaración certificada por el tribunal el 3 de junio de 2012, después de ser puesto en libertad, en la que afirmaba que la Fuerza Multinacional lo había torturado a fin de obligarle a incriminar al Sr. Omar, a quien no conocía, a cambio de su puesta en libertad. Además, la fuente sostiene que, en cualquier caso, el Sr. Omar debería haber sido puesto en libertad en 2011, puesto que el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal iraquí dispone que el período de tiempo transcurrido en prisión preventiva se debería descontar de la condena. De conformidad con dicha disposición, el Sr. Omar había cumplido la totalidad de su condena a finales de octubre de 2011 y debería haber sido puesto en libertad en ese momento. La fuente mantiene, por tanto, que no existe fundamento jurídico alguno que justifique la reclusión del Sr. Omar, por lo que su privación de libertad es arbitraria.

La fuente también sostiene que la privación de libertad del Sr. Omar es arbitraria porque este había permanecido recluso sin que se hubieran presentado cargos contra él y sin que se lo sometiera a juicio, durante más de cinco años desde su detención en octubre de 2004. Asimismo, el Sr. Omar no dispuso del tiempo ni de los medios adecuados para la preparación de su defensa, así como tampoco de asistencia letrada durante el juicio. La fuente sostiene que el incumplimiento de las normas internacionales vulnera el derecho del Sr. Omar a un juicio imparcial, consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, la fuente mantiene que la privación de libertad del Sr. Omar es arbitraria, habida cuenta del incumplimiento de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial.

Comunicación con el Gobierno

9. El 16 de diciembre de 2013 el Grupo de Trabajo envió una comunicación al Gobierno del Iraq en la que pedía al Gobierno que le facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Omar y que aclarara las disposiciones jurídicas que justificaban su reclusión continuada. El Grupo también solicitó al Gobierno que indicara si el juicio del Sr. Omar se ajustaba al derecho internacional.

10. El Gobierno respondió el 19 de marzo de 2014 que el Sr. Omar, ciudadano de los Estados Unidos, había sido condenado a siete años de prisión de conformidad con el artículo 24 de la Ley por la que se Modifica la Ley de Residencia de Extranjeros N° 118 de 1978 y que el cumplimiento de su condena había comenzado el 24 de junio de 2010.

11. Si bien el Grupo de Trabajo agradece la respuesta del Gobierno, lamenta que esta no proporcione información detallada sobre la situación actual del Sr. Omar ni aclare de forma satisfactoria las disposiciones jurídicas que justifican su reclusión continuada ni si su juicio se ajusta al derecho internacional.

Respuesta de la fuente

12. El 9 de abril de 2014, la fuente comunicó sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno. Facilitó información adicional sobre las circunstancias de la detención del Sr. Omar y su mujer el 3 de junio de 2004 y señaló que el Sr. Omar permaneció recluso sin que se hubieran presentado cargos contra él y sin que se lo sometiera a juicio hasta 2010, cuando su caso fue trasladado a un tribunal penal del Iraq. El 24 de junio de 2010, el Sr. Omar fue condenado a 15 años de prisión acusado de entrar ilegalmente en el Iraq, cargo que nunca antes se le había mencionado y que, según cree, se le imputó sobre la base de un error de identidad, puesto que se lo había condenado con el nombre de un ciudadano palestino llamado Shawqi Ahmad Sharif. Tras recurrir la sentencia, en febrero de 2011 el Tribunal de Casación redujo su pena a siete años de prisión.

13. Sigue preocupando a la fuente el hecho de que el Sr. Omar debería haber sido puesto en libertad en 2011 de conformidad con el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal iraquí, que dispone que el período de tiempo transcurrido en prisión preventiva se debería descontar de la condena definitiva.

Deliberaciones

Pruebas

14. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno, en su respuesta, no se haya referido a las alegaciones que le fueron transmitidas. A pesar de la falta de información facilitada por el Gobierno fuera de la confirmación de la condena dictada contra el Sr. Omar, el Grupo considera que está en condiciones de pronunciarse sobre la privación de libertad del Sr. Omar de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo.

15. El Gobierno no ha refutado las denuncias a primera vista fundadas presentadas por la fuente y transmitidas al Gobierno. En los casos en que se ha alegado que las autoridades públicas no han reconocido a una persona determinadas garantías procesales a las que tiene derecho, la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que la carga de demostrar el hecho negativo aducido por el demandante recae en las autoridades públicas, porque "por lo general, las autoridades públicas son capaces de demostrar que han seguido los procedimientos adecuados y aplicado las garantías previstas por la ley [...] presentando las pruebas documentales de las diligencias llevadas a cabo". El Comité de Derechos Humanos ha adoptado un enfoque similar, según el cual la carga de la prueba no puede atribuirse exclusivamente al autor de la comunicación, especialmente si se tiene en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen igual acceso a los elementos de prueba y, con frecuencia, solo el Estado parte posee la información pertinente².

Antecedentes

16. El Sr. Omar ha estado privado de libertad desde el 3 de junio de 2004. Permaneció recluido por las Fuerzas Multinacionales en varios centros de detención antes de ser entregado a las autoridades iraquíes el 15 de julio de 2011. No habiéndose pronunciado sobre la reclusión por las Fuerzas Internacionales antes de la entrega a las autoridades iraquíes, el Grupo de Trabajo se remite brevemente a algunos puntos enunciados en varias sentencias dictadas por tribunales en los Estados Unidos. En 2004, un tribunal militar determinó que el Sr. Omar era "objeto de internamiento por razones de seguridad en virtud de las leyes de la guerra" y un "combatiente enemigo en la guerra contra el terrorismo", que no era un prisionero de guerra a efectos del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. En calidad de ciudadano de los Estados Unidos, consiguió que su recurso de *habeas corpus* fuera examinado por los tribunales de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de ese país, ya que en *Munaf c. Geren*, 553 U.S. 674 (2008) —una de las dos causas consolidadas, *Munaf c. Geren* (06-1666) y *Geren c. Omar* (07-394)— se concluyó que la institución de *habeas corpus* era aplicable a los ciudadanos de los Estados Unidos recluidos en el extranjero por fuerzas estadounidenses sujetas a una cadena de mando estadounidense, aunque actuaran como parte de una coalición multinacional.

¹ *Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)*, fondo, fallo, I.C.J. Reports 2010, págs. 660 y 661, párr. 55; véase también la reiterada jurisprudencia del Grupo de Trabajo, por ejemplo la opinión N° 57/2013 (Djibouti, Suecia y Estados Unidos de América).

² Véanse, por ejemplo, las comunicaciones del Comité de Derechos Humanos N° 1412/2005, *Butovenko c. Ucrania*, párr. 7.3; N° 1297/2004, *Medjnoune c. Argelia*, párr. 8.3; N° 139/1983, *Conteris c. el Uruguay*, párr. 7.2; y N° 30/1978, *Bleier c. el Uruguay*, párr. 13.3.

17. Eso no impidió que el Sr. Omar fuera entregado a las autoridades iraquíes en ese momento, puesto que la institución del *habeas corpus* no exige de los Estados Unidos que proporcionen refugio a dichos fugitivos del sistema penal de justicia del Estado soberano con autoridad para enjuiciarlos³. El Gobierno de los Estados Unidos alegó ante los tribunales de ese país que el Sr. Omar era un terrorista y había participado en redes terroristas, y que en su domicilio se habían encontrado armas y bombas.

18. El Grupo de Trabajo se remite a su opinión N° 57/2013 (Djibouti, Suecia y Estados Unidos de América)⁴, en la que recordó que, en su jurisprudencia, sus deliberaciones, sus dictámenes jurídicos, sus informes finales de las misiones y en sus informes anuales al Consejo de Derechos Humanos, había revisado algunas cuestiones relativas a los arrestos y la detención en el extranjero y el juicio de presuntos terroristas, incluido el estudio conjunto sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo de 2010 preparado conjuntamente por cuatro relatores especiales y grupos de trabajo de las Naciones Unidas, incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria⁵. Como afirmó en su opinión N° 57/2013, el Grupo de Trabajo subraya que, en virtud del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados Unidos son responsables de los actos de sus agentes en territorio extranjero.

Privación de libertad por las autoridades iraquíes

19. La presente opinión se refiere a la privación de libertad del Sr. Omar por las autoridades iraquíes. En su respuesta, el Gobierno confirma que el Sr. Omar fue condenado a siete años de prisión por entrar en el país ilegalmente, de conformidad con el artículo 24 de la Ley por la que se Modifica la Ley de Residencia de Extranjeros N° 118 de 1978. El artículo 24 dispone que "toda persona que contravenga las disposiciones de los artículos 3, 8 o 20 de dicha Ley será castigada con una pena de cadena perpetua o una pena de prisión, y se le confiscarán los bienes que tenga en su poder". El artículo 3 prohíbe la entrada por varios motivos, entre ellos carecer de un pasaporte o no haber rellenado un formulario de llegada.

20. Respecto de la penalización de la entrada y estancia irregulares en un país, el Grupo de Trabajo ha establecido reiteradamente en su jurisprudencia⁶ y en numerosos informes⁷, que la penalización de la migración irregular sobrepasa el interés legítimo de todo Estado de proteger su territorio y reglamentar la corriente regular de migrantes⁸. El Grupo también ha mostrado que las penas por no cumplir los requisitos formales para entrar en un país están sujetas a revisión en virtud del derecho internacional⁹. Este examen es particularmente preocupante y las penas desproporcionadas contravienen el derecho internacional. El artículo 24 de la Ley por la que se Modifica la Ley de Residencia de Extranjeros es claramente desproporcionado y contraviene el derecho internacional.

³ *Munaf c. Geren*.

⁴ A/HRC/WGAD/2013/57.

⁵ Estudio conjunto sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo preparado por el Sr. Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Sr. Manfred Nowak, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, representado por su Vicepresidenta, la Sra. Shaheen Sardar Ali; y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, representado por su Presidente, el Sr. Jeremy Sarkin (A/HRC/13/42, de 19 de febrero de 2010).

⁶ Véanse, por ejemplo, las opiniones N° 43/2012 (Irak); N° 55/2011 (Líbano) y N° 56/2011 (Líbano).

⁷ A/HRC/10/21, párrs. 65 a 68, y A/HRC/13/30, párrs. 54 a 65.

⁸ A/HRC/13/30, párr. 58.

⁹ Véanse, por ejemplo, A/HRC/10/21, párr. 65, y A/HRC/13/30, párr. 55.

21. Además, el presente caso revela violaciones procesales graves, entre ellas la falta de acceso del Sr. Omar a asistencia jurídica durante su privación de libertad por las autoridades iraquíes para preparar su defensa y durante su juicio. Esto constituye una vulneración del derecho a un juicio imparcial, garantizado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Gobierno no refutó las alegaciones de que el Sr. Omar había sido declarado culpable y condenado a una pena de prisión severa y desproporcionada, tras un juicio sumario que no respetó las debidas garantías procesales de conformidad con el derecho internacional. El Grupo de Trabajo considera que la vulneración del derecho del Sr. Omar a un juicio imparcial es de una gravedad tal que confiere a su privación de libertad carácter arbitrario. La privación de libertad del Sr. Omar claramente se inscribe en la categoría III aplicable al examen de los casos presentados al Grupo.

22. El Grupo de Trabajo comparte las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil sobre un gran número de casos individuales de privación de libertad en el Iraq sin que se presenten cargos ni se incoe un proceso, a menudo por períodos prolongados. Los reclusos con frecuencia han sido objeto de desapariciones forzadas, torturas y otro tipo de maltrato durante su reclusión. Estas preocupaciones se han transmitido al Gobierno del Iraq en los últimos años y no han recibido respuesta. El Grupo lamenta que sus procedimientos, que se basan en la cooperación de los Estados, no hayan aportado más información sobre el caso del Sr. Omar después de que fuera entregado a las autoridades iraquíes.

Decisión

23. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Omar contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría III aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

24. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno del Iraq que adopte las medidas necesarias para reparar la situación del Sr. Omar y para ajustarla al derecho internacional y a las normas y los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, la compensación adecuada sería poner inmediatamente en libertad al Sr. Omar y concederle el derecho efectivo a obtener reparación, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La responsabilidad de proporcionar reparación al Sr. Omar por las violaciones de sus derechos recae sobre el Estado y debería ser exigible ante los tribunales nacionales.

26. A la luz de las alegaciones de tortura y malos tratos, el Grupo de Trabajo somete el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que adopte las medidas procedentes.

[Aprobada el 23 de abril de 2014.]